



RESOLUCIÓN 289/2023,de 10 de mayo

Artículos: 24 LTPA; 24 LTAIBG.

Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública.

Reclamación: 95/2023

Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

ANTECEDENTES

Primero. Presentación de la reclamación.

Mediante escrito presentado el 3 de febrero 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA).

Segundo. Antecedentes a la reclamación.

1. La persona reclamante presentó el 28 de diciembre de 2022 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos:

"1º.- Indíquese la tasa de reposición de efectivos de este Ayuntamiento y SODEMAN, SL calculada conforme a lo dispuesto en el art. 20.Uno.7 LPGE para el año 2022. 2º.- Dígase si esta Alcaldía ha aprobado la OEP para 2023, indicando, en su caso, el BOP de publicación. 3º.- Facilítese el resultado de la negociación de los arts. 12 a 15 del Reglamento de Personal Funcionario de este Ayuntamiento, relativa al nombramiento del Oficial-Jefe de la Policía Local, a la que se refiere el Decreto 2022/0589, de 29/7/2022, en respuesta a la solicitud de información pública presentada con fecha 23/3/2022 por quien suscribe. 4º.- Indíquese en qué fase se encuentran la RPT y la VPT, ya que este Ayuntamiento sigue infringiendo la legi 5º.- Siendo obligatorio que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria se incluyan en la Oferta de empleo público, indique por qué las plazas 07/F y 12/F siguen vacantes sin haberse convocado el proceso selectivo para su cobertura."

2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada.



Tercero. Contenido de la reclamación.

En la reclamación presentada se indica:

"El Ayuntamiento destinatario no ha facilitado, una vez más, la información pública relativa a la tasa de reposición de efectivos, la Oferta de Empleo Público de 2023, la Relación de Puestos de Trabajo y la Valoración de Puestos de Trabajo. En consecuencia, procedería obtener la información interesada según el criterio de este Consejo sobre este particular (por todas, la Resolución nº 159/2022, de 4 de marzo)."

Cuarto. Tramitación de la reclamación.

1. El 17 de febrero de 2013 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada el mismo día por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva.

2. La entidad reclamada contestó el día 10 de marzo de 2023 remitiendo cierta documentación sobre el expediente. Entre la misma, se incluye la Resolución de la Alcaldía de 10 de febrero, notificada al interesado el 16 del mismo mes, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa:

"(...) Resuelvo

"Primero. Permitir el acceso a la información descrita en los antecedentes, dando respuesta a lo solicitado:

"1º.- Indíquese la tasa de reposición de efectivos de este Ayuntamiento y SODEMAN, SL calculada conforme a lo dispuesto en el art. 20.Uno.7 LPGE para el año 2022. [en negrita]

"La tasa de reposición de efectivos de este Ayuntamiento para el año 2022 es de 2. Con respecto a Sodeman, S.L.U., se ha dado traslado a dicha sociedad al objeto de informe al respecto la petición vecinal.

"La tasa de reposición de efectivos de Sodeman, S.L.U para el año 2022 es de 0.

"2º.- Dígase si esta Alcaldía ha aprobado la OEP para 2023, indicando, en su caso, el BOP de publicación. [En negrita]

"No se ha aprobado la OEP para 2023.

"3º.- Facilítase el resultado de la negociación de los arts. 12 a 15 del Reglamento de Personal Funcionario de este Ayuntamiento, relativa al nombramiento del Oficial-Jefe de la Policía Local, a la que se refiere el Decreto 2022/0589, de 29/7/2022, en respuesta a la solicitud de información pública presentada con fecha 23/3/2022 por quien suscribe. [En negrita]

"No consta acta de la sesión de 20 de mayo de 2022.



*"4º.- Indíquese en qué fase se encuentran la RPT y la VPT, ya que este Ayuntamiento sigue infringiendo la legi.
[En negrita]*

"En fase de elaboración.

"5º.- Siendo obligatorio que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria se incluyan en la Oferta de empleo público, indique por qué las plazas 07/F y 12/F siguen vacantes sin haberse convocado el proceso selectivo para su cobertura. [En negrita]

"Los procesos selectivos de las diferentes plazas convocadas o a convocar por esta Administración se están realizando de forma progresiva.

"(...)"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación.

1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d LTPA al ser un Ayuntamiento de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo.
2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA.
3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, *"[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad"*, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.

Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor.



Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 28 de diciembre de 2022, y la reclamación fue presentada el 3 de febrero 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC.

Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública

1. Constituye "información pública" a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones" [art. 2 a) LTPA].

Según establece el artículo 24 LTPA, "[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz [...] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley". Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el "principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley".

La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación.

2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º).

Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera):

"La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es



un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto).

3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto.

Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación.

Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo no puede por menos que declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto, tras el análisis del contenido de la información puesta a disposición, al considerar que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA.

En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

Esta resolución consta firmada electrónicamente.